

Libertad de Expresión

La plena vigencia de la libertad y de la democracia encuentra, entre otros obstáculos, una insuficiente protección de la libertad de expresión, deficiencias de algunas de las instituciones judiciales y la existencia de una concepción de la seguridad del Estado que ni logra su propósito ni garantiza la libertad. Con todo, el conflicto entre la seguridad del Estado y los intereses de la libertad tiene solución.

No hay sociedad libre sin un conjunto de derechos colectivos e individuales. Estos últimos fueron expuestos por John Stuart Mill —uno de los padres del liberalismo— en su ensayo "Sobre la Libertad". En este libro —publicado en 1859— plantea que la libertad comprende tres aspectos: el dominio interior de la conciencia, la libertad de gustos y, por último, libertad de asociación. Cada uno de esos aspectos requiere de condiciones que permitan o incluso promuevan, respectivamente, la libertad de expresión, la posibilidad de que cada cual estructure el plan de su propia vida y, finalmente, la posibilidad de vincularse para realizar iniciativas (políticas, económicas, culturales, etcétera).

Mill no acepta que se pueda silenciar a una persona, aunque esté errada. En efecto, la teoría liberal de la libertad de expresión se apoya en una teoría de la ciencia que sostiene que el conocimiento es perfectible. La verdad, para Mill, existe sólo en medio de un debate en el cual las distintas opiniones son expuestas y contradichas. La más calumniosa y falsa de las opiniones contribuye a que la verdad aparezca con su propio carácter de verdad, ya que ésta se constituye en ese espacio frágil e inestable en el cual la conciencia de cada cual discrimina entre distintos argumentos. Si la verdad o el conocimiento estuvieran depositados en alguna institución científica, judicial, política o cultural, deberíamos llamarlo dogma, pues la verdad y el conocimiento sólo existen en el debate y mientras dure el debate. Nada favorece tanto a quien está en lo cierto como dar libre curso a la mentira; ello le permite a él, como a los demás, saber quién está en lo cierto, en qué y por qué. Incluso si el contenido del "Libro Negro" fuese falso, contribuiría al progreso del saber al permitirnos reconocer la mentira. Al confiscarse el libro, se nos priva de incrementar nuestro conocimiento y se nos encadena a la incertidumbre.

La libertad de contradecir por medio de la opinión, incluso falsa, no sólo no retarda la marcha de los asuntos importantes, sino que es la condición para que la autoridad disminuya la posibilidad de equivocarse. Las autoridades políticas, judiciales y militares aumentarían su ascendiente si la comunidad supiera que pueden salir airoso de la calumnia me-



El avance hacia una sociedad más libre requiere del acostumbramiento de parte de las autoridades, electivas o no, a verse sometidas a la libertad de opinión.

dante el lento pero sólido trabajo con que la verdad demuele a la mentira gracias a la libertad de expresión. La solución administrativo-judicial de los conflictos que oponen libertad de opinión, por un lado, y autoridades, por el otro, genera un efecto contraproducente. El libro, como otras obras prohibidas, circula clandestina pero abundantemente y es debatido con un interés que ningún publicista hubiera podido darle. Ello favorece el esclarecimiento de la verdad, el progreso de la libertad y, sobre todo, a

Nada favorece tanto a quien está en lo cierto como dar libre curso a la mentira; ello le permite a él, como a los demás, saber quién está en lo cierto, en qué y por qué

las autoridades mencionadas en él.

Por eso, con respecto al "Libro Negro", se piensa que algunos magistrados no comprenden los beneficios que obtiene la justicia con la libertad de opinión, consagrada en la Carta de 1980, y que han carecido de prudencia, sin la cual un juez, aunque aplique la ley, nunca es justo.

El avance hacia una sociedad más libre requiere del acostumbramiento de parte de las autoridades, electivas o no, a verse sometidas a la libertad de opi-

nión. Resulta peligroso para la justicia y para la libertad restringir el campo de lo opinable sólo a los procesos electorales. A mayor rango institucional, más sometidas deben quedar las autoridades al debate público, independientemente del modo como se generen (cargos de confianza, cooptación jerárquica, etcétera). Liberalismo y socialismo contemporáneos coinciden en que cuanto más elevado sea el nivel jerárquico de una autoridad, más peligro hay de que use su poder de modo erróneo o en perjuicio de la libertad individual o colectiva de terceros. Por eso, más que los simples ciudadanos, cuyos actos tienen consecuencias limitadas, las autoridades no debieran sustraerse al escrutinio público, aun si éste las injuria o calumnia.

El supuesto daño que una calumnia pueda causarle a la autoridad nunca será tan nefasto como el tomar las decisiones en un enclaustramiento que no sólo no garantiza a terceros la corrección de sus actos, sino que ni siquiera se lo garantiza a la autoridad, pudiendo arrastrarla a errores que la hundan a ella y a la sociedad.

Una interpretación completa del vínculo entre seguridad del Estado y libertad de opinión debe orientarse en sentido contrario al de la legislación actual, garantizando que toda autoridad esté bajo el ojo de la opinión pública, incluso a riesgo de que se la calumnie o se la injurie, lo que evita males mucho mayores. Y, al mismo tiempo, debe proteger más claramente a los simples ciudadanos de los abusos con que la autoridad o la misma opinión pública puedan atentar contra la libertad y la privacidad individuales.

Hernán Neira
Profesor de la Universidad
Austral de Chile y Escritor

F r e e d o m o f S p e e c h

El Mercurio, June 26th, 1999

Published in relation with Supreme Court's seizing of the book

The Black Book of Chilean Justice

The achievement of true freedom and democracy finds several obstacles, as a poorly protected freedom of speech, deficiencies in some judicial institutions, and the existence of a State security concept that neither achieves its goal nor guarantees freedom. However, the conflict between State security and the interests of freedom and democracy can be solved.

A free society does not exist without a set of collective and individual rights. The latter were exposed by John Stuart Mill, one of the fathers of liberalism, in his essay *On Liberty*. In this book, published in 1859, Mill suggests that freedom includes three aspects: inward domain of consciousness; liberty of taste and pursuits; and freedom of association. Each of these aspects requires some conditions that allow and even develop, respectively, freedom of speech, the ability to plan our own lives and, finally, the possibility to put initiatives into practice (political, economic, cultural, etc.)

Mill does not accept that a person be silenced, even if he or she is wrong. In fact, the liberal theory of freedom of speech finds support in a scientific theory, which states that knowledge is perfectible. According to Mill, truth can only be found in the middle of a debate in which different opinions are expressed and also contradicted. The presentation of false opinions helps the truth to become evident, since truth exists in the fragile and unstable space in one's conscience, which evaluates arguments. If truth and knowledge were to be placed in any institution, be it scientific, judicial, political or cultural, we should call it a dogma, since truth and knowledge only exist while debate exists and only while the debate lasts. Nothing favours more the people who are right than allow for lies, because it provides everyone with the opportunity to know who is right, in what way and why. Even if the contents of the *Black Book* were false, it would contribute to the progress of wisdom, allowing to recognise lies. If the book were to be confiscated, we would not have the opportunity to increase our knowledge and we would be chained to doubt.

The liberty to contradict by way of opinion, even that which is false, does not delay the progress of important issues. Even more, authorities are less likely to make mistakes. Political, judicial and military authorities would improve their reputation if the community knew that they were able to overcome calumnies through the slow but steady process in which truth conquers lies when freedom of speech is present. When administrative and judicial institutions either jeopardize freedom of speech as a solution to conflict or impose more authority, they create a counterproductive effect. The *Black Book*, as other banned works, goes round in a clandestine and abundant way and is discussed with a fervour that any publicist would have dreamt of. This favours the revelation of the truth, the progress of freedom and, on top of this, the authorities mentioned in the book.

Therefore, in relation to the *Black Book*, it is thought that some magistrates do not understand the benefits that justice gains from freedom of speech, as confirmed in the Act of 1980. It is also thought that they have had a lack of prudence, and, when this occurs, they are unable to be fair, even if they have followed the law.

If we want to become a freer society, our authorities, elective or not, must get used to being faced with freedom of opinion. To limit free expression of speech solely to be used during electoral periods is dangerous for justice and freedom. The higher the institutional rank, the more visible the authorities must be critiqued in public debate, no matter how the authoritative post was achieved (trust position, hierarchical co-optation, etc.). Contemporary liberalism and socialism have something in common, and that is that the higher the hierarchical level of an authority, the more possibilities the authorities have to use their power in a wrong way and possibly harming individual or collective freedom of third parties. Therefore, authorities should be subject to public scrutiny, even if it insults or calumniates them, more so than regular citizens, whose acts have limited consequences.

The supposed damage that a lie could cause to an authority will never be so ill-fated as when they make decisions in secret, which not only does not guarantee the correctness of these decisions, it also could lead to mistakes that would affect authority and society together.

A comprehensive interpretation of the connection between the security of the State and freedom of speech must be oriented in the opposite way to that of the current legislation, making sure that all authorities are under the eye of public opinion and scrutiny. It does not matter if authorities are insulted or calumniated, because citizens must be protected from the abuses with which authority and the very freedom of speech may attempt to impose against freedom and individual privacy.

Hernán Neira

Professor of Universidad Austral de Chile and author